

## La negociación con las autodefensas: ¿El Caguán de las derechas?

Por Teófilo Vásquez. Sociólogo, investigador del Cinep

**La actual crisis de proceso de negociación con los grupos paramilitares y el escándalo de la parapolítica expresan el fracaso de dos de las estrategias básicas con que el gobierno de Álvaro Uribe encaró el viejo dilema de paz o guerra que ha arrastrado la sociedad colombiana durante decenios:** la negociación con los grupos paramilitares y su desarme, desmovilización y reinserción (DDR); y simultáneamente, la clara intención de propinar una derrota estratégica a las Farc a través del Plan Patriota, con el objetivo de realizar posteriormente una negociación política y económica favorable al establecimiento, lo cual no se logró.

Con respecto a los paramilitares, la pretensión de iniciar un proceso de legalización, institucionalización y legitimación de los poderes políticos, así como la captura parcial del Estado local y regional, que estos grupos habían iniciado en el 2000 como medida preventiva ante los posibles impactos de la negociación entre el presidente Andrés Pastrana y las Farc en el Caguán, se encuentra actualmente en una seria crisis.<sup>i</sup>

Las condiciones que derivaron en ese relativo fracaso suponen dos momentos que desarrollaremos a continuación: El análisis del paramilitarismo en el mediano plazo, no sólo como fenómeno militar sino también como proyecto económico y político; y las dinámicas actuales del proceso más relacionados con la negociación entre Álvaro Uribe y las autodefensas; finalmente, tomamos como ejemplos ilustrativos las vicisitudes e impactos diferenciados del DDR en dos regiones del país.

### Una mirada de largo plazo, más allá de lo militar

La apertura económica indiscriminada de principios de los noventa, afectó muchos de los procesos de consolidación de la economía agroindustrial que estaban siendo relativamente protegidos por el Estado en su política económica dirigida al sector agrario en los años sesenta y setenta. Situación que con la eventual firma del TLC podría traducirse en una mayor crisis del campo colombiano, que se expresaría en el fortalecimiento de economías ilícitas y de los grupos armados, tal como aconteció en la década pasada.

Los cambios estructurales de este sector, que comprenden la expansión de los cultivos ilícitos, del narcotráfico y la crisis de algunos sectores agroindustriales, explican la heterogeneidad de los grupos paramilitares: una cosa son los grupos relacionados con los procesos intensivos de agroindustrialización como la palma africana, que reemplazó el algodón en el Cesar; otra cosa son los grupos relacionados con la ampliación de las actividades pecuarias y los procesos de ganaderización, tanto de las viejas élites latifundistas como de los procesos intensivos de compra de tierras y lavado de activos por parte de los

<sup>i</sup> Ver: Torres, M.C. (2007, abril), "El contrato social de Ralito", en *Cien días vistos por Cinep* [en línea], núm. 60, disponible en \_\_\_\_\_

narcotraficantes; y otra, los ejércitos privados más directamente vinculados a crear condiciones de seguridad de las diferentes etapas de la cadena productiva del narcotráfico.

Estas variaciones se hicieron explícitas durante el proceso de negociación con estas agrupaciones en Santa Fe de Ralito, que a su vez podemos ejemplificar en la diferenciación de varios de los jefes más conspicuos: una cosa es Salvatore Mancuso, hijo de inmigrantes italianos vinculados a la ganadería del valle del río Sinú, quien "terminó metido" en la violencia en defensa de su propia vida; otra cosa es Ramón Isaza, representante típico de las autodefensas con carácter defensivo, que tenían como único objetivo neutralizar el accionar insurgente en la economía ganadera y latifundista del Magdalena Medio; y otra cosa son Ernesto Báez y Don Berna, ambos ligados más directamente al narcotráfico, el primero como un caso de mercenarismo "intelectual" y el segundo prácticamente como un jefe del narcotráfico.

La crisis de la economía agraria legal, especialmente en el ámbito regional y local, creó condiciones para el crecimiento de las economías agrarias ilegales que se concretaron en el crecimiento de los cultivos de coca y amapola. Así mismo, la intensificación de la guerra y los cambios en las condiciones estratégicas del conflicto armado implicaron modificaciones importantes en la economía política cocalera.

Los paramilitares a mediados de la década de los ochenta surgen de la mano del narcotráfico, es decir, de los grandes productores y comercializadores de droga. Desde finales de la década de los noventa entran a disputar el control de zonas cultivadas y de campesinos cultivadores, especialmente en desarrollo de una estrategia militar y política en regiones como el sur de Bolívar, Catatumbo, Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. En estos dos últimos departamentos el objetivo fue contrarrestar la influencia guerrillera en la región y neutralizar la alianza entre la presencia histórica de la guerrilla y la protesta social que tuvo en las marchas de campesinos cocaleros de 1996 su máximo desarrollo.

**El conflicto armado es, ante todo, una disputa por el monopolio de la fuerza y la coerción, que hace que la economía cocalera se halle todavía subordinada a una estrategia política...**

Las Farc por su parte, a finales de la década de los ochenta, solamente cobraban gramaje a los campesinos cocaleros e imponía precios de compra a los grandes narcotraficantes de pasta de coca, así como a sus intermediarios en las zonas de colonización cocalera. Luego pasaron, dada la intensificación del conflicto armado, de cobrar impuestos a controlar parte de la producción y posteriormente toda la cadena productiva del sur del país, cambiando coca por armas. Pero no solamente como estrategia económica sino también por razones políticas y de seguridad, ya que el proceso de comercialización y producción de la cocaína era percibido como más proclive a la creación de bases sociales del paramilitarismo.

Más adelante, durante la intensificación de la guerra a finales de la década de los noventa, se produjo un viraje hacia nuevas disputas por el control de las diferentes economías regionales del narcotráfico y de las diferentes etapas de la cadena productiva.

Sin embargo, sería incompleto considerar únicamente que el proceso de inserción de los grupos armados en la economía de las drogas, les ha permitido la obtención de mayores recursos, y por ende, les ha posibilitado el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura militar. Esta afirmación es básicamente cierta, pero hay que poner también de presente que detrás de la lucha de guerrilleros y paramilitares por el control de toda la cadena productiva de la economía ilegal de la coca, así como de las regiones y subregiones -cuya economía tiene como principal dinámica la coca, la cocaína y la amapola- también se siguen jugando "los deseos" y los "modelos" de sociedad que los grupos armados quieren imponer a la sociedad colombiana en el orden cultural y político.

Aun más, las dinámicas territoriales del conflicto no se pueden reducir exclusivamente a la disputa entre actores armados por recursos en función de financiar su guerra. El conflicto armado es, ante todo, una disputa por el monopolio de la fuerza y la coerción, que hace que la economía cocalera se halle todavía subordinada a una estrategia política, aunque también trate de garantizar el monopolio sobre los recursos económicos.

Finalmente, el interés de los actores armados, en particular en esta última etapa de los paramilitares por controlar los gobiernos locales y municipales -sobretudo en políticas públicas de carácter social como la educación y la salud- no hace sino desarrollar el proceso mediante el cual los agentes productivos necesitan, para garantizar su éxito, dinámicas que impliquen mejores niveles de vida y desarrollo social de la población en las zonas donde desarrollan su actividad económica.

Es decir que los agentes productivos están capturando la institucionalidad para construirla en función de sus intereses; o dicho de otra manera, al proceso de contrarreforma agraria que durante la década de los noventa venían construyendo los grupos paramilitares se le sumó, a partir de 1998, el proceso de contrarreforma política que se concretó en una de las "piezas fundamentales" del actual escándalo de la "parapolítica": el documento de Santa Fe de Ralito, firmado entre varios políticos y la cúpula paramilitar a finales del 2001.

### **Los límites de una negociación incierta**

El proceso de negociación entre las autodefensas y el actual gobierno no fue capaz de disipar y buscar fórmulas de consenso a tres ejes problemáticos que arrastró durante estos cuatro años: las relaciones entre autodefensas y narcotráfico; los instrumentos jurídicos o marco normativo del proceso; y finalmente condiciones de irreversibilidad para el proceso de DDR.

En primer lugar, durante el proceso de negociación con el actual gobierno, se hace evidente la fragmentación de los grupos paramilitares que tiene como eje las diferencias alrededor de sus vínculos con el narcotráfico. Éste proceso termina por favorecer a Don Berna y a Ernesto Báez en desmedro de la posición de sus dos fundadores Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, lo que significa que el Bloque Central Bolívar ha terminado por imponerse sobre el proyecto unificador de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Precisamente el hecho de que una de las fracciones más comprometidas con el narcotráfico se impusiera al interior del fenómeno paramilitar terminó por reducir el margen de maniobra y la legitimación del proceso de negociación, especialmente ante la comunidad internacional. Es así como uno de aliados fundamentales, Estados Unidos, fue retirando su decidido apoyo inicial, ya que su principal interés, que es acabar con la exportación de la coca, no fue posible; por el contrario, Colombia presencia un auge del narcotráfico.

En segundo lugar, la ley de Justicia y Paz no acaba de satisfacer las expectativas de importantes actores y sectores políticos y sociales sin cuyo consenso es inviable un proceso de reconciliación. Los paramilitares insisten en que el marco legal es insuficiente para garantizar lo que denominan la seguridad jurídica del proceso, y lo que es aún más grave, no parecen estar dispuestos a asumir los costos políticos de la verdad sobre el origen, desarrollo y expansión de fenómeno paramilitar; tampoco los costos económicos de la devolución de bienes y fortunas acumulados ilegalmente por medio del terror y la violencia.

Para la comunidad internacional y nacional -en especial para las organizaciones de derechos humanos y las víctimas- dicha ley conduce a la impunidad y está lejos de ser un instrumento de verdad, justicia y reparación, requisitos indispensables en un proceso de negociación en las actuales circunstancias de internacionalización de la justicia y de la importancia del tema de los derechos humanos en la agenda internacional.

En tercer lugar, el proceso de DDR sigue atado a las dinámicas regionales del conflicto armado que aún se mantienen con las Farc, así como a las lógicas de expansión de las economías cocaleras y cocaineras y a los impactos diferenciados a los que conduce inevitablemente toda política pública concebida, diseñada y manejada de manera centralista, como es caso del programa presidencial para el DDR.

### **Los impactos diferenciados del DDR en lo local y regional**

Para ilustrar este aspecto hemos escogido dos regiones donde el impacto del proceso de DDR ha sido diferenciado: Medellín y el Valle de Aburrá, y el Departamento de Nariño, en particular el Andén Pacífico.

**... de la disminución de los indicadores de violencia no se puede concluir que el fenómeno paramilitar haya desaparecido ...**

En Medellín y su área metropolitana los índices de violencia han disminuido sustancialmente y el proceso de DDR ha contado con un escenario favorable: de un lado, el compromiso político e institucional del alcalde Sergio Fajardo, expresado en un programa especial para los desmovilizados con un modelo de intervención integral dirigido a la persona, su familia y la comunidad, lo cual sumado a la experiencia adquirida durante las desmovilizaciones de las milicias en los años 90, facilitó el "capital institucional" necesario para diseñar y ejecutar un programa que enmendara muchos de los errores cometidos en el pasado y permitió, con relativo éxito, hacer frente a la desmovilización de una de las estructuras urbanas más grandes del paramilitarismo que en su momento era el Bloque Cacique Nutibara.

Sin embargo, el diseño y puesta en marcha de una política local apropiada de DDR, contrasta con los medios con los que se logró semejante situación, que tienen implicaciones en las vicisitudes de la negociación más política y nacional con las autodefensas. En primer lugar, se afirma que de la disminución de los indicadores de violencia no se puede concluir que el fenómeno paramilitar haya desaparecido; por el contrario, las autodefensas han redoblado el control de la vida económica y social de las comunas. Es decir que nos hallamos lejos del desmonte de

paramilitarismo como modelo de encuadramiento social y económico y ante una disminución temporal de su accionar violento frente a la ausencia de otras competidores; aun peor, cuando estas condiciones de control exclusivo se lograron con aquiescencia de las fuerzas armadas del Estado, como en el caso de la Comuna 13 en octubre de 2002, último reducto de las milicias urbanas de la guerrilla en la ciudad<sup>ii</sup>; o mediante la derrota previa de otras estructuras paramilitares menos proclives al narcotráfico, como es el caso del Bloque Metro; o a través de la cooptación de todas las estructuras de delincuencia organizada que fueron puestas al servicio del proyecto paramilitar.

La situación de Nariño y el Anden Pacifico es contraria. Allí el gobierno departamental y las administraciones municipales han estado al margen del programa nacional de DDR. Los índices de violencia y conflicto armado han aumentado y existe un contexto regional adverso para el proceso de DDR ya que la dinámica reciente del conflicto armado se caracteriza por ser un proceso de lucha por el control territorial de áreas que hasta hace poco no tenían presencia de ninguno de los actores armados. El proceso de desarme y desmovilización ha generado fragmentación en los grupos que operaban en la región; además, por el reciente copamiento y recuperación de territorios por parte de las Farc; y por último, el posicionamiento y la disputa por las rutas que interconectan al Pacífico con la zona Andina y la selva amazónica en función del auge del narcotráfico.

En Nariño el programa nacional de DDR, tanto para los combatientes rasos, los mandos medios y aun menos para el paramilitarismo como proyecto económico, social y político, no logró convertirse en un incentivo mayor que los atractivos generados por la economía cocalera. En síntesis, en aquellas regiones donde subsista la presencia y el auge de la economía cocalera, el proceso de DDR es inviable, aun en condiciones óptimas de lo que se denomina la voluntad política.

Correo de contacto: [violenciayestado@cinep.org.co](mailto:violenciayestado@cinep.org.co)

---

<sup>ii</sup> Ver: *Noche y Niebla*, (2002), "Comuna 13, la otra versión", caso tipo núm. 2, disponible en: <http://www.nocheyniebla.org/casotipo/Comuna13/03Capitulos.pdf>